

Bogotá D.C.,

Señor(a)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN PENAL

secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co

despenal009tutelas2@cortesuprema.gov.co

Referencia: Acción de Tutela Rad No. 11001020400020220095500

Accionante: **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**

Accionado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Asunto: **OPOSICIÓN ACCION DE TUTELA**

Respetados señores,

DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.032.478.205, obrando como apoderado general de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.-SAE, sociedad de acciones simplificada de economía mixta, del orden nacional, de naturaleza única y sometida al régimen de derecho privado, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante escritura pública No. 204 del 6 de febrero de 2009, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Pereira, entidad que en virtud de la Ley 1708 de 2014 es la administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), acuso recibo del auto, por medio del cual da traslado de la demanda de tutela de la referencia, otorgando 24 horas para pronunciarse sobre las manifestaciones del extremo activo del proceso.

I. ANTECEDENTES.

La señora **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**, identificada con la C.C No. 43.449.476, actuando en nombre propio, decidió presentar la acción constitucional, para que el Juez de Tutela ampare los derechos fundamentales presuntamente vulnerados (Derecho a una vivienda digna) con las gestiones de administración realizadas por la Sociedad de Activos Especiales respecto al inmueble identificado con el FMI No. 018-9319, ubicado en la Calle 21 # 46a-89, por lo tanto, permito indicar que:

II. OPOSICIÓN

A. DE LAS FUNCIONES DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. Y LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

El ordenamiento jurídico Colombiano, señala las funciones de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. como la entidad encargada de la administración de los bienes, que sean puestos a disposición del Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha Contra el Narcotráfico FRISCO¹, por parte de las autoridades judiciales competentes, sin que esta pueda intervenir dentro de los procesos a los cuales se encuentran vinculados dichos bienes, por lo cual, simplemente cumple funciones de depositaria y administradora de los bienes, más no puede disponer de ellos sin que medie una orden judicial.

Así las cosas, es evidente que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., no se encuentra transgrediendo los derechos fundamentales de la accionante, pues mal haría esta Sociedad en emitir ordenes sobre bienes que no hayan sido dejados a disposición del FRISCO.

¹ Ley 1708 de 2014.

Finalmente, es preciso poner de conocimiento que frente a la calidad en la que intervenía la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en las acciones de extinción de dominio, la Jurisprudencia Nacional² ha sido enfática en señalar que:

“En relación con las funciones censuradas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Corte argumentó que “(...) son compatibles con la facultad de ordenar medidas cautelares y con la índole de éstas en cuanto mecanismos orientados a asegurar la posterior realización de los fines del proceso de extinción de dominio”.

(...) Es cierto que al afectado se lo priva de la administración de sus bienes y que esta decisión se toma antes del fallo que declare la procedencia o improcedencia de la acción. No obstante, esa privación, que constituye un límite al ejercicio de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, es legítima dado que no obedece al capricho de un funcionario estatal sino a la concurrencia de elementos probatorios de los que infiere, de manera razonable, que unos bienes tienen una procedencia ilícita.” (Subrayas fuera de texto).

En consideración a lo expuesto por la Corte Constitucional, es totalmente aplicable a las funciones que cumple la SAE como administradora del FRISCO, por lo que frente a la presente actuación, no existe acción u omisión que genere la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, cuyo amparo solicita la accionante, con lo cual se desconfigura el supuesto normativo contemplado por el artículo 86 de la Constitución Política, toda vez que ante la ausencia de la acción u omisión de la autoridad, desaparece la violación o amenaza al derecho constitucional fundamental, debido a la falta del nexo causal necesario para la consolidación de este presupuesto primigenio de la mencionada acción excepcional, lo que deviene en una notoria falta de legitimación en la causa por pasiva de mi representada.

B. DE LAS FUNCIONES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Es indispensable poner en conocimiento del H. Despacho, las funciones de Policía Administrativa que posee la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., las cuales fueron conferidas mediante la ley 1849 de 2017, que modificó el párrafo tercero del artículo 91 de la ley 1708 de 2014, otorgando de forma directa la facultad de policía administrativa al administrador del FRISCO, la S.A.E, como se evidencia a continuación **“El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración.”**

Es importante tener en cuenta que, la SAE desde el año 2015 cuenta con la facultad de policía administrativa, que en su momento fue delegada por la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia en virtud del *numeral 14 del artículo 11 del Decreto Ley 2897 de 2011*, mediante Convenio Interadministrativo N.º 000169 del 29 de enero de 2015, el cual fue prorrogado hasta enero de 2017. Facultad que, en virtud de lo expresado en el párrafo anterior, se encuentra en cabeza de la S.A.E. actualmente de forma directa, por lo que ha habido continuidad en la facultad de policía administrativa ostentada por la S.A.E. desde el año 2015 hasta la actualidad.

La facultad de policía administrativa tiene como objetivo la recuperación material de los bienes del FRISCO, para que se puedan ejercer en debida forma los mecanismos de administración, que permiten mantener productivos los bienes, y así dar cumplimiento al mandato legal de la S.A.E. expresado en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014.

Por otro lado, tanto en la ley 1708 de 2014 como en el Decreto 2136 de 2015, se establece la posibilidad de ejercer de forma directa la facultad de policía administrativa, así como la obligación de las autoridades de policía locales, departamentales y nacionales de prestar, sin dilación injustificada, el apoyo que requiera el representante legal o su delegado, para hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al FRISCO.

² Sentencia C-540 seis (6) de julio de dos mil once (2011). Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 – 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

En ese orden de ideas, es claro que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., no ha vulnerado derecho fundamental alguno en el asunto de la referencia, pues ha actuado en cumplimiento de un mandato legal, más aún si tenemos en cuenta que se trata de una ocupación irregular sobre un bien que tiene limitación al derecho de dominio por encontrarse inmerso dentro de un proceso de extinción de dominio, en consecuencia, el bien inmueble forma parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, fondo que es administrado por la Sociedad de Activos Especiales.

De conformidad con las consideraciones expuestas, esta Sociedad actúa en desarrollo de la función que le compete y con total respeto a los parámetros normativos que el ejercicio de su actividad le impone, le solicito a este respetable Juzgado niegue por improcedente lo pretendido por intermedio de la acción de tutela incoada contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, en su calidad de administradora del FRISCO, por las partes accionantes, y en su lugar conmine a que cesen su oposición a la entrega y permitan a esta Sociedad, ejercer sus facultades legales de administración sobre los inmuebles inmersos dentro de los tramites de extinción de dominio.

C. NO VULNERACIÓN A LOS DERECHOS INVOCADOS POR PARTE DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

En primer lugar se precisa que la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., en cumplimiento de un mandato legal, se encuentra encargada de la administración de los bienes inmersos en procesos de extinción del derecho de dominio, sin tener injerencia en decisiones judiciales, pues esta Entidad no está facultada para adelantar procesos de esa naturaleza, ya que conforme lo establecido en el artículo 117 y siguientes de la Ley 1708 de 2014, es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación³. Cabe indicar, que esta Entidad sólo acata las órdenes que los diferentes despachos judiciales le imparten a lo largo de los procesos de extinción de derecho de dominio.

Por lo tanto, la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. – SAE, en virtud de la entrada en vigor de la Ley 1708 de 2014⁴, se encarga de la administración del FRISCO y de los bienes que lo conforman y que son puestos a su disposición por parte de las Autoridades Judiciales, dentro del proceso de extinción de dominio, sin que a la fecha exista decisión en firme que respecto de la situación jurídica del inmueble.

La Ley 1708 de 2014, señala la finalidad del secuestro de los bienes inmersos dentro de los procesos de extinción de dominio, el parágrafo 2 del artículo 88 de la mencionada Ley, precisó: ***“PARÁGRAFO 2o. La entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) será el secuestre o depositario de los bienes muebles e inmuebles, sobre los que en el pasado se hayan adoptado o se adopten medidas cautelares, los cuales quedarán de inmediato a su disposición a través del citado Fondo. Así mismo será el administrador de los bienes respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio, mientras se adelanta el proceso de entrega definitiva o su enajenación.”***

En consideración a lo expuesto, en la presente actuación, no existe acción u omisión que genere la violación de los derechos fundamentales por parte de la Sociedad que represento⁵, cuyo amparo solicita la accionante, con lo cual se desconfigura el supuesto normativo contemplado por el artículo 86 de la Constitución Política, toda vez que ante la ausencia de la acción u omisión de la autoridad, desaparece la violación o amenaza al derecho constitucional fundamental, debido a la falta del nexo causal necesario para la consolidación de este presupuesto primigenio de la mencionada acción excepcional, lo que deviene en una notoria falta de legitimación en la causa por pasiva de mi representada.

D. IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA Y FALTA DE COMPETENCIA.

³ Ley 1708 de 2014. “Artículo 117. Fase inicial La acción de extinción de dominio se adelantará de oficio **por la Fiscalía General de la Nación** por información que llegue a su conocimiento, siempre y cuando exista un fundamento serio y razonable que permita inferir la probable existencia de bienes cuyo origen o destinación se enmarca en las causales previstas en la presente ley.

⁴ La cual derogó las Leyes 785 y 793 de 2002, a partir del 20 de julio de 2014.

⁵ En cumplimiento de sus funciones como administradora del FRISCO, conforme a la Ley 1708 de 2014.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establece que son causales de improcedencia de la tutela:

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”

Como puede observarse en el escrito de tutela la inconformidad del accionante tiene origen, básicamente en el cumplimiento de la función legal que le asiste a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, de administrar los bienes que se encuentran inmersos en procesos de extinción de dominio, y sobre los cuales se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo.

Por lo tanto, se debe recordar que las resoluciones judiciales de inicio de los procesos de extinción de dominio cobran firmeza inmediata a su expedición, en consecuencia, la **jurisdicción especialísima de EXTINCION DE DOMINIO adquirió COMPETENCIA** para resolver sobre la extinción del dominio de los bienes inmuebles y sobre las situaciones particulares de cada sujeto afectado. **Excluyendo así a las demás jurisdicciones para conocer de estos asuntos.**

En consecuencia, cabe reiterar que la determinación adoptada dentro del proceso de extinción con base en la licitud de la adquisición de la propiedad o la destinación que se le dé a los bienes, diverge completamente de la función ejercida por esta Sociedad, que no es otra que la de administrar los bienes dejados a su disposición, en las condiciones ya mencionadas, y si bien el accionante manifiesta que ya existe decisión definitiva por parte de la autoridad judicial competente, debe acudir a la misma para solicitar la notificación de la providencia que ordenó la no extinción del derecho de dominio del predio identificado con los **FMI 018-9319**.

De conformidad con las consideraciones expuestas, al haber actuado esta Sociedad en desarrollo de la función que le compete y con total respeto a los parámetros normativos que el ejercicio de su actividad le impone, le solicito a este respetable Despacho niegue por improcedente lo pretendido por intermedio de la acción de tutela incoada por los accionantes.

E. NO SE HA DEMOSTRADO EL PERJUICIO IRREMEDIABLE, NI DAÑO IRREPARABLE.

Aunado a lo anterior, en el presente asunto no se acreditó por parte de los accionantes el daño o perjuicio irremediable causado, por lo que mal haría el Juez en fallar únicamente con elementos subjetivos que no se encuentran debidamente probados.

De conformidad con lo manifestado en repetidas ocasiones por la doctrina constitucional⁶, la acción de tutela es un mecanismo expedito, subsidiario, inmediato, específico y eficaz, el cual tiene un trámite preferente y sumario, creado únicamente para garantizar la protección de derechos fundamentales.

La subsidiariedad de la acción constitucional se fundamenta en el principio de tutela judicial efectiva que radica en cabeza del Estado, el cual ha instituido diferentes jurisdicciones y mecanismos de protección ordinarios, para solucionar los conflictos de carácter jurídico que se presentan entre los ciudadanos, por lo tanto, **la acción de tutela únicamente cumple la función de efectivizar la protección de derechos fundamentales y de operar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable**, frente a problemas jurídicos de ciudadanos⁷ que no están en calidad de soportar las displicencias de un trámite ordinario administrativo y/o judicial.

Por otra parte, para que el estudio de la presente acción de tutela resultara procedente, el Juez debe analizar si la parte accionante acredita la existencia de un perjuicio irremediable, (de conformidad con la técnica jurídica), para lo cual debió tener en cuenta lo consagrado en el artículo 177 del Código de

⁶ Auto 053/02.

⁷ Sujetos de especial protección que necesitan la intervención del Juez de Tutela, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, pre pensionables, personas en estado de incapacidad e indefensión manifiesta, menores de edad.

Procedimiento Civil⁸, perjuicio irremediable que, como puede evidenciarse, NUNCA FUE PROBADO, razón además que deviene en la infructuosidad de la presente acción de amparo, en los términos consignados por la Corte Constitucional en sentencia T – 309 del 30 de abril de 2010. M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA:

*“En el caso concreto que ocupa la atención de esta Sala, **el actor no fundamenta de manera expresa la interposición del recurso en la existencia de un perjuicio irremediable, no explica, siquiera sumariamente, en qué consiste tal perjuicio, como tampoco por qué se encuentra en una situación de indefensión**, ni da cuenta de las razones por las cuales considera que los medios de defensa judicial ordinarios son insuficientes para cuestionar la legitimidad de los actos administrativos.*

*Aunque la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la prueba sobre la existencia del perjuicio irremediable no está sometida a rigurosos formalismos o términos sacramentales, **sí ha exigido un mínimo de diligencia del afectado, en el sentido de indicar por lo menos las circunstancias que permitan al juzgador comprobar su configuración, punto sobre el cual el actor en el presente caso guardó silencio**”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).*

Así las cosas y considerando que, hasta la fecha no ha sido demostrado que existe un perjuicio grave e irremediable que pudiera causarse a los accionantes en el evento de recurrir a otros mecanismos idóneos y eficaces de defensa del derecho que se cree vulnerado.

F. PROTOCOLO

Resulta pertinente indicarle que, esta Sociedad desarrolló un Protocolo de desalojos, el cual tiene como propósito orientar al personal de SAE encargado de realizar las diligencias de entrega a los bienes inmuebles, en cuanto a la información que debe conocer y acciones a realizar previamente, durante y posterior al desalojo del bien. Lo anterior implica que su obligatoriedad es exclusiva para los funcionarios de SAE y en ningún escenario constituye una guía de operación para las entidades acompañantes, por cuanto las actividades de administración que adelanta esta Sociedad no son de público conocimiento.

Sin embargo, es claro señor Juez que esta Sociedad frente a la diligencia que nos ocupa ha implementado las medidas necesarias para prevenir la amenaza o afectación de preclaros derechos constitucionales fundamentales de los ocupantes del bien, realizando actividades tales como la solicitud de apoyo a las autoridades correspondientes para cumplir los actos, actividades y diligencias tendientes al eficaz acatamiento de lo resuelto en los actos que se expidan en el ejercicio de la función de policía administrativa.

Así mismo, dichas autoridades deberán prestar de manera preferente y sin dilación injustificada, el apoyo que requiera esta Sociedad, para hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al Frisco, conforme lo descrito en el parágrafo 3 del artículo 91 que fue modificado por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017.

G. OPOSICIONES A LA DILIGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES.

Vale la pena indicarle que la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. como administradora del FRISCO conforme la delegación legal del artículo 90 de la Ley 1708 de 2014 manifiesta su voluntad a través de actos administrativos⁹ (denominados Resoluciones) para efectos de atender tal función. Por lo tanto, esta Sociedad en desarrollo de tal designación adelanta actuaciones administrativas, conforme el artículo 4° CPACA¹⁰, por medio del cual consagra las formas de iniciar el procedimiento administrativo, entre las que

⁸ Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627.

⁹ La Corte Constitucional en Sentencia C-1436 del 2000 señaló: “El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados”.

¹⁰ Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 – 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

se encuentra el cumplimiento de una obligación o deber legal, expresión que significa la imposición de una función por parte del legislador cuyo cumplimiento es imperativo y por tal razón le otorga a la administración la competencia necesaria para que la cumpla.

Es decir, la SAE expide actos administrativos mediante los cuales se pronuncia sobre todos los aspectos que refieran a su papel como gestor de los bienes que administra, esto es modificando, creando o extinguiendo situaciones jurídicas relacionados con ellos; en ese sentido dichos actos podrán calificarse de acuerdo a la naturaleza de la decisión que conlleve, como son entre otros, generales o particulares (según el efecto que persigan), definitivos o de trámite (según su contenido), resolutorios, de ejecución o de trámite (en el curso de un proceso administrativo).

Por tal razón, es oportuno precisar que la actuación administrativa que adelanta esta Sociedad, tiene como única finalidad la correcta administración de los bienes que le son puestos a su disposición a través del FRISCO, como desarrollo del mandato legal impuesto en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, por ello no hay un sujeto particular, entiéndase persona natural o jurídica, a la cual la SAE le decida una situación jurídica, sino que el objeto del procedimiento o de la actuación que desarrolla, es la debida gestión de los activos.

A partir de ahí, es que los actos que se expidan en el curso de dicha actuación no concluirán la actuación administrativa iniciada por la SAE, sino que le darán impulso a la misma como, por ejemplo, el ejercicio de la función de policía administrativa, como quiera que este tipo de actos no son controvertibles y no admiten la interposición de recursos, permitiéndole acudir a la jurisdicción administrativa para controvertir el acto en caso de considerarlo carente de motivación y/o falta de requisitos legales.

En este orden de ideas y conforme lo anterior, los actos administrativos de ejecución **NO DEFINEN UNA SITUACIÓN JURÍDICA** diferente a la que ya fuera resuelta por las autoridades judiciales, las cuales permiten llevar a cabo materialmente la decisión ejecutiva, por lo tanto, no es de recibo ninguna de sus solicitudes por parte de esta Sociedad.

De tal modo que, la diligencia de desalojo y/o recuperación física de los bienes **NO** podrá ser suspendida en el evento que se presenten oposiciones a la misma, toda vez que esta Sociedad debe estar sujeta a lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 91 que fue modificado por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, el cual señala que:

*“(…) **Parágrafo 3°. El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración.***

Las autoridades de Policía locales, municipales, departamentales y nacionales estarán obligadas a prestar, de manera preferente y sin dilación injustificada, el apoyo que requiera el representante legal o su delegado, para hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al Frisco.

En el evento en que el administrador del Frisco ejerza la facultad de policía administrativa a través de las Alcaldías y Secretarías de Gobierno, las mismas deberán proceder a asignar la Inspección de Policía, para ello contarán con un término máximo de quince (15) días contados a partir de la comunicación del administrador. En igual término los inspectores estarán obligados a fijar, practicar y culminar la diligencia. El incumplimiento injustificado de los anteriores términos estará sujeto a la sanción disciplinaria correspondiente. La presentación de oposiciones no suspenderá la práctica de la diligencia”. Subrayado fuera de texto.

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.
2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.
4. Por las autoridades, oficiosamente” (Negrilla y Subrayado de texto)

III. PRECEDENTE JUDICIAL

Resulta valioso resaltar que frente a situaciones fácticas y jurídicas idénticas, el Juez Constitucional se ha pronunciado atendiendo el principio de legalidad que rige nuestro ordenamiento jurídico, declarando la improcedencia del amparo solicitado, pues en oportunidad anterior, siendo accionante el señor RICARDO FERNANDO DE LA PARRA MORALES, quien reclamaba el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideraba vulnerado por el trámite del proceso de extinción de dominio y con la Resolución No. 1365 del 2016, por medio del cual SAE ejerce las funciones de policía administrativa respecto de los inmuebles inmerso dentro del trámite extintivo de propiedad del accionante, mediante Sentencia de fecha 09 de marzo de 2017, la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revoco el fallo de primera instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, y en su lugar NEGÓ POR IMPROCEDENTE el amparo deprecado, argumentando en su decisión:

“(…) De tal manera que, contrario a lo manifestado por el fallador de primera instancia y a lo pretendido por el actor, es en dicho escenario procesal, ante el funcionario natural, en donde debe el accionante, por sí mismo o a través de su abogado, presentar las solicitudes encaminadas a remediar situación que estime desconocedora de sus garantías, pues al juez constitucional no le corresponde interferir en ese asunto porque, se repite, el proceso extintivo del dominio se encuentra en curso.

Si a lo dicho se agrega que la actuación de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), emerge enmarcada en las funciones de policía administrativa otorgadas en el numeral 14 del artículo 11 del Decreto 2897 de 2011 en materia de cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas en procesos de extinción de dominio, deviene lógico colegir que su proceder se ajustó al debido proceso, pues, una vez, los bienes fueron legalmente secuestrados por orden de la Fiscalía se dejaron a disposición del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado- FRISCO que es administrado por la SAE y que en ejercicio de su actividad dispuso en Resolución 070 del 03 de febrero de 2016 modificada por la Resolución 1017 del 29 de agosto de 2017 hacer efectiva la entrega, lo que comunico a los ocupantes del inmueble el siguiente 15 de diciembre.

De manera tal que en atención a que la Resolución 070 del 03 de febrero de 2016 modificada por la Resolución 1017 del 29 de agosto de 2017, se dictó en cumplimiento de una decisión judicial proferida por la Fiscalía no puede ser controvertida en sede administrativa o jurisdiccional, por tratarse de un acto administrativo de ejecución, es decir, se limita a satisfacer la orden judicial que se le impartió (sentencia del 7 de abril de 2011, sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicado 2500-23-25-000-2010-00152-01 (1495-2010).

Así las cosas, como el acto administrativo atacado no obedecen a la decisión libre, autónoma o voluntaria de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), sino al acatamiento de un mandato judicial, mal podría derivarse de ello la conculcación de los derechos fundamentales del accionante.

Súmese a lo dicho que la ley confiere al actor varios mecanismos al interior del proceso para activar sus derechos, tales como solicitar el levantamiento de la medida cautelar, someterla a control de legalidad o pedir que el bien se le deje en depósito provisional según se depende del ordenamiento que regula el proceso extintivo de dominio, incluso, puede acudir a solicitudes de declaratoria de nulidad.

En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en los términos previstos por el numeral 1 del artículo 6 del decreto 2591 de 1991 (...).”

Y concluyo

“Entonces, como quiera que la acción de tutela no es una tercera instancia, ni un instrumento alternativo, supletorio o paralelo a la actividad jurisdiccional de administrar justicia, sino un mecanismo excepcional al que solo se puede acudir cuando se han agotado todas las posibilidades dentro del proceso

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 – 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

correspondiente, sin que se hubiere logrado subsanar el agravio de la garantía constitucional deviene imperativo concluir que las pretensiones ahora invocadas deben ser planteadas al interior del proceso, en los términos que la ley confiere al afectado en un proceso de extinción del derecho de dominio.”

Así las cosas, los Jueces de Tutela al declarar la improcedencia de la acción incoada por el señor DE LA PARRA MORALES, tiene en cuenta los requisitos mínimos para presentar la acción constitucional, los cuales en el caso que nos ocupa, no se encuentran satisfechos, por tal razón solicito a su Honorable Autoridad tener en cuenta el precedente judicial relacionado y aportado a la presente contestación, con el fin de brindar seguridad jurídica en temas relacionados con la materia.

De tal manera se concluye que:

Se trata de un inmueble identificado con FMI No. 018-9319, ubicado en la Calle 21 # 46a-89, el cual fue declarado extinto mediante sentencia 071 del JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO. quedando en poder de la NACION (FRISCO).

FRENTE A LOS HECHOS

1.1 Que se pruebe, la SAE desconoce con certeza lo acá afirmado.

1.2 Es cierto, como se desprende del material probatorio aportado, que en el inmueble se encontró dicha sustancia en el gramaje indicado, a las demás afirmaciones sobre el uso y destino que se les dio a esas sustancias, no es objeto de los hechos que pretender tutelar en esta tutela.

1.3 No nos consta que se pruebe, estos hechos no tienen relación directa con la SAE, no nos consta las actuaciones procesales que tengan que ver con la acusación y juzgamiento en el caso de referencia.

1.4 Es cierto, como se desprende de las actuaciones adelantadas, mismas que fueron narradas en los proveídos aportados.

1.5 Es cierto como se desprende del material probatorio aportado.

1.6 Es cierto como se desprende del material probatorio.

1.7 Sobre este punto, la SAE, se abstiene de hacer algún pronunciamiento, pues dicha decisión se encuentra ejecutoriada, y no corresponde con nuestra competencia entrar en el debate propuesto por la accionante.

1.8 Sobre este punto, la SAE, se abstiene de hacer algún pronunciamiento, pues dicha decisión se encuentra ejecutoriada, y no corresponde con nuestra competencia entrar en el debate propuesto por la accionante.

1.9 No nos consta, Sobre este punto, la SAE, se abstiene de hacer algún pronunciamiento, pues dicha decisión se encuentra ejecutoriada, y no corresponde con nuestra competencia entrar en el debate propuesto por la accionante.

1.10 No nos consta, que se pruebe, sobre este punto, la SAE, se abstiene de hacer algún pronunciamiento, pues dicha decisión se encuentra ejecutoriada, y no corresponde con nuestra competencia entrar en el debate propuesto por la accionante.

1.11 Ante este hecho es necesario aclarar a la corte, que NO es cierto que este núcleo familiar, este completamente desamparado y no tengan a donde ir, pues de la búsqueda en bases de datos VUR, por cedula de la afectada señora LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO, se desprende que a su nombre cuenta

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 – 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co



con varios bienes inmuebles sujetos a registro, como lo son los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria y que no están afectados con ningún gravamen.

2

LOTE DE TERRENO 8.200MTS.2	020-188704	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL
----------------------------	------------	-----------	----------------------

PREDIO	020-172969	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL
--------	------------	-----------	----------------------

LOTE DE TERRENO 8.200MTS.2	018-149089	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL
----------------------------	------------	-----------	----------------------

De tal manera que, desde la Gerencia Regional de la SAE, se han enviado varias cartas donde se hace el requerimiento a los ocupantes para que de manera voluntaria procedan a realizar la entrega del predio de manera acordada, sin embargo siempre la posición de los ocupantes es cuestionar el proceso penal y sus resultados, y desconocer la función otorgada por la Ley 1708 de 2014 a nuestra entidad, para la administración y recuperación de los predios afectados con medidas cautelares o declarados extintos, como es el caso.

1.12 Es cierto, como se ha manifestado, nuestra entidad ha enviado varios comunicados a los ocupantes donde se les informa la necesidad de recuperar el predio, so pena de adelantar la materialización y recuperación del inmueble tal como lo ordena la Resolución 0452 del 24 de abril de 2019, emanada por la presidencia de la SAE, ordenando ejercer las facultades de policía administrativas tendientes a recuperar el predio. tal como lo afirma la tutelante, ante la entrega de dicha misiva, se guardó silencio y no entregaron el predio en la fecha indicada, situación que nos convocó a iniciar las diligencias para la diligencia de desalojo.

1.13 Es cierto, la tutelante, presento petición, misma que se le dio respuesta de fondo, donde se le informa sobre los puntos cuestionados, la imposibilidad de que la SAE pueda realizarles algún contrato de arrendamiento, y por último se les indica que la fecha límite para entrega del predio sería el 09 de mayo de 2022, so pena de que el día 10 de mayo se realice la diligencia de desalojo previa notificación. (se adjunta respuesta con Radicado CS2022-010732.

Nuevamente el día 02 de mayo, se dejó pegada la notificación de desalojo para el día 10 de mayo de 2022 a las 9:00 am, y se citaron a los entes garantes para acompañar la diligencia de materialización de la resolución que ordena ejercer las facultades de policía administrativa.

1.14 Es cierto, se dio respuesta a dicha petición y se le informo sobre la última fecha de entrega voluntaria.

1.15 No nos consta que se pruebe, el señor Julián y sus hermanos dicen no trabajar, pero la señora madre, se encuentra trabajando en los Estados Unidos de Norte América, además de tener otros bienes inmuebles que no cuentan con afectaciones.

El día 10 de mayo, en compañía de los entes garantes, personería, secretaria de gobierno, familia, salud, comisaria de familia, y el funcionario designado para la recuperación del predio, nos presentamos en el inmueble para ejecutar la recuperación, en el sitio somos atendidos por los hermanos toro, y la psicóloga de la corporación de derechos humanos que los apoya en su defensa, la señora LUZ MIRIAM, no se encontró en la diligencia, manifestó sus hijos que se encuentra laborando en EEUU, nos indicaron que presentaron acción de tutela con medida cautelar, misma que al momento de la diligencia se aportó por los ocupantes el acta de reparto y la remisión por competencia a la corte sala penal.

Por parte de la personería municipal, se deja la solicitud de suspender la diligencia hasta tanto se le de respuesta, y los ocupantes tengan un lugar donde ir, pues dicen desconocer los demás bienes que tiene la madre, además de sustentar la dificultad en el señor Jonatan toro, quien tiene una discapacidad de

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

movilidad, las demás entidades adscritas a la alcaldía, sostienen estar de acuerdo con el ministerio público, piden suspender y en ese plazo se comprometen a revisar que oferta institucional se les puede prestar a esta familia, sin dejar de tener en cuenta que los ocupantes son mayores de edad.

Ante estas manifestaciones, la SAE en aras de mayores garantías, pues como se sabe en el predio se encuentra una persona con discapacidad, se accede a lo solicitado por los entes garantes, pese a que la acción de tutela no cuenta con una medida provisional que la suspenda, los ocupantes manifiestan que se les otorgue un mes, es decir hasta el día 10 de junio de 2022 a las 9:00 am, para entrega voluntaria, en caso tal que la acción constitucional sea en favor de la SAE.

De lo acá descrito, es importante destacar a la Honorable corte, que, desde la Sociedad de Activos Especiales, no se han menos cavado los derechos que la tutelante sostiene, en el entendido que todas las acciones que se han adelantado desde esta entidad, han estado ejercidas dentro del marco del debido proceso, la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales de los afectados con las medidas judiciales decididas y ejecutoriadas.

Se logra demostrar que efectivamente esta familia cuenta con recursos o bienes inmuebles donde pueden disponer su habitación, además que la señora madre labora según afirmaron sus hijos en diligencia de desalojo, que ella vive en los EE. UU y aporta el sustento de la familia, que los señores Julián, y Sebastián son independientes, artistas y dj de música, que el único que cuenta con condición especial es Jonatan toro, quien es mayor de edad y tiene una discapacidad de movilidad.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

De conformidad con los argumentos aportados, se niegue la protección constitucional solicitada, pues la SAE, no ha vulnerado ningún derecho fundamental en el presente caso, por lo que se solicita al despacho desestimar por completo las peticiones que sostienen los tutelantes.

se adjunta fotografías de la notificación de desalojo la cual se negaron a recibir personalmente.

Ya se había enviado copia de la suspensión de la diligencia de desalojo, se envía pantallazo con los FMI que registran a nombre de la tutelante.

Se adjunta copia de la caracterización realizada por la alcaldía de marinilla y su secretaria de familia.

Se adjunta copia de la respuesta al PQRS ofrecida a la ocupante

Se adjunta copia de la resolución N° 0452 del 24 de abril de 2019

V. PETICIÓN.

En conclusión, debo manifestar que, según lo expuesto, no le asiste razón o fundamento alguno que permita a su Honorable Despacho, estimar las pretensiones de la parte accionante, más aún, cuando aparece demostrado que sus derechos fundamentales no han sido vulnerados por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.E S.A.S, ya que esta Sociedad ha obrado siempre con apego a la ley.

De conformidad con todo lo anterior, me permito solicitar que se **DENIEGUE** el amparo solicitado en la presente acción de tutela y **DESVINCULE** a SAE del presente trámite constitucional.

Atentamente,

DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR
GERENTE DE ASUNTOS LEGALES
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

Proyectó: Salim Arana Garcia
abogado gerencia de asuntos legales.
archivo: 11001020400020220095500/ LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO